



Proceso	Verbal
Demandante	Neuver de Jesús Serna Restrepo y O.
Demandado	Wilver Ferney Hincapié Quiroz y O.
Radicado	05001 31 03 015 2018 00392 01
Instancia	Segunda
Origen	Juzgado Civil del Circuito de Caldas
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 048
Decisión	Revoca
Tema	Decreto de pruebas
Subtemas	El auto que rechaza una prueba debe estar debidamente sustentado

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL

Medellín (Ant.), veintiuno de abril de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en forma parcial contra el auto proferido el cuatro de noviembre del año anterior, por el **JUZGADO QUINCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN**, en cuanto negó el decreto de pruebas a solicitud de la parte demandada en este proceso Verbal

instaurado por **NEUVER DE JESUS SERNA RESTREPO, YEISON NEUVER SERNA BENITEZ, PIEDAD ELENA VERA AREIZA, JORGE ANDRES VERA AREIZA Y ANA ISABEL USUGA USUGA**, en nombre propio y en representación de los menores **EDISON MANUEL Y JUAN CAMILO VIDAL USUGA**, en contra de **WILVER FERNEY HINCAPIE QUIROZ, LAS BUSETICAS S.A.S., PRECOLOMBINA DE TURISMO ESPECILIZADO S.A.S - PRECOLTUR-**.

II. ANTECEDENTES

Por auto proferido el 4 de noviembre del pasado año, el Juzgado Quince Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, negó la prueba documental por oficio con soporte en el art. 168 del C. General del Proceso, argumentando:

"HISTORIA CLÍNICA: Oficiar al HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA a efectos de que remita copia de historia clínica de ingreso a los señores LUIS ALBERTO USUGA, YULIETH VANESSA JARAMILLO MARTINEZ y NEUVER SERNA RESTREPO es una prueba superflua para este proceso, y adicionalmente, al tenor del Art. 173 C.G.P inciso 2, no se acreditó ejercicio del derecho de petición para conseguirla.

"COPIA DE INVESTIGACION CRIMINAL INTEGRAL: No se evidencia en expediente digital prueba o acreditación sumaria del ejercicio previo del Derecho de petición tal y como lo dispone el art. 173 inciso 2 del ibídem".

Contra esta decisión la demandada, LAS BUSETICAS S.A.S., interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con soporte en los siguientes argumentos: Con el oficio a la ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA pretende acreditar un hecho exclusivo de las víctimas, consistente en que los ocupantes de la motocicleta se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente; el que no solo se puede acreditar con el informe de la autoridad de tránsito y policía; sino, también con los registros de la historia clínica de ingreso; siendo claro que la historia clínica es una prueba conducente, pertinente y, sobre todo útil, para la defensa de la demandada; en cuanto a la acreditación de haber solicitado la información mediante derecho de petición, advierte que la historia clínica es un documento que está sometido a reserva legal por mandato del art. 34 de la Ley 23 de 1981.

En cuanto al oficio a la Fiscalía para que remita copia de la investigación realizada con ocasión al accidente que dio lugar a este proceso, advierte que se trata de una investigación penal, en la cual LAS BUSETICAS no es parte y no puede obtener la prueba vía derecho de petición, precisando que solo la orden judicial puede traer al proceso esta información.

El 28 de noviembre de 2022, el Juzgado resolvió el recurso de reposición en forma negativa y, subsidiariamente, concedió el de apelación. Al efecto, argumenta que en el escrito de contestación de la demanda, evidencia una solicitud probatoria que no precisa la situación fáctica a

probar; por el contrario, hizo una simple petición que llevó al Juzgado a cuestionar la utilidad de la prueba, porque en el proceso ya obran pruebas suficientes para el debate probatorio y esclarecimiento de los hechos, lo que llevó a inferir que la prueba es inútil y superflua para el proceso; ahora, con el recurso viene a decir que pretende probar el estado de embriaguez de los ocupantes de la moto y, en consecuencia, la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad; así, mismo porqué esas pruebas las pudo obtener mediante el ejercicio del derecho de petición; adicionalmente, el Despacho considera innecesario el decreto de las pruebas documentales por exhorto; la historia clínica de los señores Luis Alberto Úsuga, Yulieth Vanessa Jaramillo Martínez y Neuver Serna Restrepo, así como copia de la investigación realizada por la Fiscalía, toda vez que se trata de documentos sumamente extensos en los que la mayoría de la información allí contenida es inútil para el proceso.

En últimas, con soporte en los arts. 169 y 275 del C. General del Proceso, ordenó oficiar al HOSPITAL SAN ANTONIO del Municipio de Tarazá – Antioquia, para que allegué al proceso informe de necropsia sobre los cuerpos de Luis Alberto Úsuga y Yulieth Vanessa Jaramillo Martínez, así como también, los resultados del examen toxicológico y de embriaguez practicado a los precitados y al lesionado Neuver de Jesús Serna Restrepo.

III. CONSIDERACIONES

Para dar inicio a la fase probatoria del proceso, el juez tiene que decretar las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio estime pertinente; para cuyo efecto, debe verificar si se cumplen los requisitos para su decreto. Al efecto, el art. 168 del C. General del Proceso, establece: “**Rechazo de plano.** *El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles*”.

Por su parte, el art. 173 de la misma obra, en lo pertinente, establece: “*El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiere sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente*”.

Antes de proceder a rechazar una prueba, como la solicitada, con soporte en el art. 173 del C. General del Proceso, el juez tiene que verificar si la parte interesada pudo obtenerla mediante el ejercicio del derecho de petición; en caso contrario, tiene que oficiar a la oficina donde se encuentran los documentos para que los remita con destino al proceso; lo que se busca con la norma es maximizar los principios de concentración, celeridad y eficacia del proceso, imponiendo a las partes la carga de allegar tales medios de convicción que puedan obtener

directamente sin la intervención del juez. Ahora, si los documentos están sujetos a reserva legal, como ocurre con la historia clínica de las personas por expreso mandato del art. 34 de la Ley 23 de 1981 o con las investigaciones que se realizan en la Fiscalía, donde también existe reserva legal y a la que normalmente no tienen acceso quienes no intervienen como sujetos procesales, el recurrente se encuentra en imposibilidad para su obtención mediante el ejercicio del derecho de petición y, en estos casos, el camino que le queda al interesado, es solicitar a la judicatura que decrete la prueba, ordenando mediante auto que se aporte al proceso.

Así mismo, se constata que al negar la prueba el Juzgado sin explicaciones también dijo que era superflua, a pesar de que tenía que argumentar la decisión en debida forma; pues el auto que rechaza una prueba debe estar debidamente motivado, como lo dispone el art. 168 ibídem.

En la resolución del recurso de reposición, también indicó que el recurrente al momento de peticionar la prueba no señaló los hechos que pretendía probar y solo con el recuso manifestó que pretende acreditar el estado de embriaguez de las víctimas, circunstancia que no puso de presente al negar la prueba; luego, precisa que se trata de documentos que son muy extensos y que en su mayoría son innecesarios para el proceso y termina decretando una prueba con miras a establecer el referido estado de embriaguez.

Como el fundamento de la responsabilidad invocada es un accidente de tránsito, donde a más de las autoridades de tránsito, también conoce la Fiscalía General de la Nación por las personas que en ese episodio perdieron la vida y resultaron lesionadas, sin dificultad se constata la pertinencia de las pruebas solicitadas, como quiera que los hechos que allí son objeto de investigación, también son determinantes en este litigio, para verificar todas las circunstancias que rodearon el fatídico accidente y, de contera, la responsabilidad invocada como fundamento de la pretensión y de los medios de defensa.

Consecuente con lo anterior, se revocará la negativa de las pruebas solicitadas y, en su lugar, se procederá a decretarlas.

IV. RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,**

R E S U E L V E


- 1.** Se revoca el auto de fecha y procedencia indicadas, por lo dicho en la parte motiva.
- 2.** Se decretan las pruebas solicitadas; en consecuencia: i) se ordena oficiar al HOSPITAL SAN ANTONIO DE TARAZA,

para que a costa del interesado remita con destino al proceso, copia de la historia clínica de ingreso de los señores LUIS ALBERTO USUGA, YULIETH VANESSA JARAMILLO MARTINEZ y NEUVER SERNA RESTREPO y, ii) Se ordena oficiar a la Fiscalía donde se realiza la investigación penal, para que, a costa del interesado, se remita con destino al proceso copia de las actuaciones allí adelantadas. El Juzgado de primer grado librará los oficios para los fines indicados.

3. Sin costas porque no se causaron.

4. Se ordena devolver la actuación al Juzgado de origen.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a large circular flourish at the beginning and a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARÍN
Magistrado